



A la izquierda, un contador de radiactividad en Palomares. Manuel Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, y a su derecha, el embajador de EE UU, tras su baño, en 1966, para mostrar la falta de peligro.



PACO BALINAB / EP

Los vecinos quieren ampliar el plazo para lograr indemnizaciones

Palomares no ha olvidado las bombas, 20 años después

ANTONIO TORRES, Almería
Esta mañana, a las 10.18, se cumplen los 20 años de aquella otra de 1966 en la que Pedro Domingo Sánchez Egea, mientras explicaba a una veintena de escolares las lecciones contenidas en cualquier enciclopedia enton-

ces al uso, observó repentinamente "un apocalipsis, con el cielo totalmente negro". A 60 metros del colegio cayó el tren de aterrizaje de uno de los aviones. Unas décimas de segundo antes dos aeronaves norteamericanas, un B-52 y un nodriza, habían chocado

en el cielo de la pedanía almeriense de Palomares. Comenzaba así un accidente dramático que dejó sobre la tierra y el mar siete muertos y cuatro bombas termonucleares. La que cayó al mar era 16 veces más potente que la que destruyó Hiroshima.

Lo que pudo haber sido peor: la posibilidad real de un invierno nuclear de incalculables consecuencias. Un pescador de Aguilas, Francisco Simó, *Paco el de la bomba*, rescató el artefacto del mar.

Veinte años después, Antonia Flores, de 26 años, alcaldesa de Palomares, socialista, ha entregado en los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa una petición suscrita por varios centenares de vecinos para que el plazo de presentación de reivindicaciones por daños que pudiese ocasionar aquel accidente no prescriba a los 20 años, como establece la ley de Energía Nuclear promulgada en 1964, justo dos años antes del caso *Palomares*. Otra de las peticiones realizadas por los afectados se centra en que las revisiones y los controles clínicos a los que hasta ahora han sido sometidos continúen en el futuro, porque hasta ahora sólo han recibido expedientes, en muchos casos con datos equivocados, y no los historiales clínicos.

Para la totalidad de los vecinos los hechos siguen estando plenamente vigentes. El paso del tiempo no ha sido capaz de borrar la experiencia dramática de un riesgo real e incalculable ni la imagen archivada en la retina del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, bañándose en aguas de Palomares —la imagen dio la vuelta al mundo— acompañado por el embajador de Estados Unidos en España, Angier Biddle Duke. "Nos prohibieron comer tomates, y ahora es lo único que producimos", manifiesta un agricultor con tono resignado.

Detenidos en el aire

Para el maestro, el accidente no fue una sorpresa. "Llevábamos bastantes días observando a la misma hora a dos aviones que parecían detenidos en el aire", dice Pedro Domingo Sánchez, que ahora tiene 65 años y que en aquella ocasión compaginaba su puesto de director escolar con el de ayu-

dante técnico sanitario. Los cerca de un millar de vecinos de Palomares, pedanía de Cuevas de Almanzora (Almería), dos décadas después siguen en la confusión sobre lo ocurrido.

"Nos poníamos en una habitación, a oscuras, porque el pueblo quedó sin luz, para oír Radio Pirenaica", dice una anciana de riguroso luto a la salida de misa el domingo por la tarde.

"Los yanquis sólo dejaron una potabilizadora, que lleva todo el tiempo como pieza decorativa", subraya Julio González, de 58 años, agricultor, quien añade que los aviones le destrozaron su vivienda y un cortijo. Y "sólo me indemnizaron los daños del banco, y muy por debajo de lo que pedía".

Antonia Flores, alcaldesa pedánea de Palomares, apenas tenía seis años cuando el accidente. Todavía no ha logrado olvidar la pesadilla de aquel día en que jugaba con su hermano. Flores, desde que los socialistas ganaron en las elecciones municipales de 1983 en

Cuevas de Almanzora y declararon todo el municipio zona desnuclearizada, se ha desplazado en numerosas ocasiones a Madrid para pelear porque los historiales clínicos se entregasen definitivamente a los vecinos por parte de la Junta de Energía Nuclear (JEN). Este capítulo todavía sigue abierto.

El Defensor del Pueblo

El defensor del pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, recibió a mediados de diciembre a la alcaldesa.

Si por aquel entonces era la marquesa de Medina-Sidonia quien ponía el grito en el cielo, ahora periodistas de todo el mundo volverán a preguntarse por qué tuvo que ocurrir ese accidente que detuvo el tiempo en Palomares hace 20 años. El caso *Palomares* también ocasionó que Estados Unidos, ocho días después del accidente, prohibiera que sus aviones con material atómico sobrevolasen el cielo español.

Presentado un recurso para poder efectuar reclamaciones

Madrid
La alcaldesa de Palomares, Antonia Flores, confía que tras el recurso presentado el pasado martes ante Exteriores y Defensa, el Gobierno les respalde. Y "nos conceda el derecho a presentar reclamaciones mientras continuemos sometidos a este riesgo ambiental". Antonia Flores efectuó estas declaraciones horas antes de que se cumpliera el vigésimo aniversario de la caída de las cuatro bombas.

La alcaldesa entregó ayer una carta en la Embajada de Estados Unidos, junto con una copia de la información entregada en los ministerios, junto con una carta

en la que pide al embajador Thomas Enders que prosiga la ayuda de EEUU para la investigación del suceso, en lo que hasta ahora se han invertido 150.000 dólares. El acuerdo confidencial de 1964, que vincula a EEUU con este tipo de accidentes, recoge la posibilidad de interponer un recurso, como se ha hecho, una vez transcurrido el tiempo acordado para las reclamaciones por daños nucleares diferidos. Con la presentación de este recurso se amplía el plazo de presentación de reclamaciones fijado en 20 años que expira hoy.

Hasta el momento, según datos de Greenpeace, EE UU ha

pagado 700.000 dólares en concepto de indemnizaciones. Según la alcaldesa, el tiempo para presentar quejas debe ser ilimitado.

Según explicó un miembro de la Junta Directiva de Greenpeace en España, Jordi Bigas, las partículas de uranio permanecen en el suelo del pueblo y pueden producir accidentes incluso más de veinte años después. "Es más los efectos de las radiaciones aparecen a partir de muchos años".

El representante de Greenpeace denunció los informes realizados por la Junta de Energía Nuclear (JEN) sobre los habitantes

de Palomares y terrenos circundantes diciendo que "son incompletos y llenos de errores". Si el recurso no prospera, añadió, "llegaremos a la conclusión de que la Administración española está supeditada a los intereses de potencias internacionales".

Para Greenpeace la JEN ha politizado "durante estos veinte años el tema y lo ha convertido en un asunto llo de interrogantes". Greenpeace y la alcaldesa de Palomares piden la creación de un grupo de investigación que cuente con la colaboración de instituciones extragubernamentales.